

C.A. de Santiago

Santiago, ocho de marzo de dos mil veintidós.

VISTO:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción de sus considerandos 45° al 52°, que se eliminan.

Asimismo, en el motivo 53°, se sustituye la oración “sin perjuicio de lo ya resuelto, y solo a mayor abundamiento se analizará” por “corresponde, en consecuencia analizar”.

Y TENIENDO, EN SU LUGAR, PRESENTE:

PRIMERO: Que en estos autos Rol N° C-24521-2015, seguidos ante el 30° Juzgado Civil de Santiago, sobre indemnización de perjuicios, caratulados “López con Instituto Oftalmológico Limitada”, ambas partes, demandante y demandado, presentaron recurso de apelación, en contra de la sentencia definitiva dictada con fecha 13 de septiembre de 2018, que dispuso lo siguiente: I. EN CUANTO A LAS TACHAS DE TESTIGOS: 1. Que se acogen las tachas deducidas por la parte demandada a fojas 601 y 610, y por la parte demandante a fojas 615. 2. Que se rechazan las tachas deducidas por la parte demandante a fojas 630 y 643. II. EN CUANTO AL FONDO: 3. Que se acoge la excepción de cosa juzgada deducida a fojas 725, por aplicación del artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, respecto de la acción entablada a fojas 1. 4. Que se rechaza la demanda reconvencional interpuesta en el otrosí de fojas 235, por no configurarse el hecho ilícito imputado. 5. Que cada parte asumirá sus costas.

SEGUNDO: Que el asunto esencial en este caso, lo constituye la decisión de la juez a quo de acoger la excepción de cosa juzgada, por aplicación del artículo 179 N° 1 del Código de Procedimiento Civil, pues discute el demandante en su apelación la concurrencia de la triple identidad conforme a lo que se establece en el artículo 177 del Código de



Procedimiento Civil, agregando que la hipótesis del artículo 178 del mismo cuerpo legal, no tiene cabida respecto a los presentes autos, toda vez que no se está ante un caso que amerite su aplicación, al no haber condena criminal respecto de ninguno de los intervinientes; lo que en todo caso no obsta a que se puedan interponer las acciones legales que busquen atribuir una responsabilidad civil al efecto, para terminar refiriéndose a que tampoco corresponde la aplicación del artículo 179 N° 1 de esa codificación, apoyándose en una sentencia, de la cual destaca el siguiente párrafo: “...la competencia del juez del crimen está limitada a conocer de los actos dolosos o culpables expresamente sancionados por la ley, en tanto que la del juez civil se extiende a todos aquellos actos en que ha habido cualquier clase de culpa, imprudencia o negligencia, y es por eso que la sentencia absolutoria en materia criminal no tiene los mismos efectos que la condenatoria...”.

TERCERO: Que las sentencias absolutorias por regla general no producen cosa juzgada en materia civil, con las excepciones que contempla el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, precepto que señala “Las sentencias que absuelven de la acusación o que ordenan el sobreseimiento definitivo sólo producirán cosa juzgada cuando se funden en alguna de las circunstancias siguientes: 1.º La no existencia del delito o cuasidelito que ha sido materia del proceso...”.

CUARTO: Que, tal como lo señala el actor, la jurisprudencia ha dicho al respecto que “mientras la responsabilidad a que se refiere el Título XXXV del Libro IV del Código Civil tiene su causa en todo acto culpable que haya infligido daño a otro, cualquiera que sea el grado de culpa, imprudencia o negligencia cuya consecuencia son de cargo del hechor o de la persona bajo cuya autoridad aquel estuviere, la



responsabilidad criminal es personal, existe respecto de quien ha obrado con dolo, y para que se haga efectiva se requiere que el hecho delictuoso o cuasidelictuoso esté especialmente penado; de donde se sigue que la competencia del juez del crimen está limitada a conocer de los actos dolosos o culpables expresamente sancionados por la ley, en tanto que la del juez civil se extiende a todos aquellos actos en que ha habido cualquier clase de culpa, imprudencia o negligencia, y es por eso que la sentencia absolutoria en materia criminal no tiene los mismos efectos que la condenatoria, estando reservado a esta última producir siempre los efectos de la cosa juzgada y a la primera producir tales efectos únicamente en los casos expresamente señalados en el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil” (Repertorio de Legislación y Jurisprudencia. Editorial Jurídica. T. I, p. 254 C.S., 20 marzo 1952).

QUINTO: Que en este caso se persigue la responsabilidad de los demandados por la mala utilización de la justicia con motivo de la presentación de querellas, pretensión respecto de la cual los demandados opusieron la excepción de cosa juzgada en virtud del sobreseimiento definitivo que se dictó en la causa RIT 6988-2014 seguida ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, en que don Patricio López Cid (demandante) se querelló por el delito de denuncia calumniosa en contra de don Ricardo Bittelman Saporta y doña Marcia Millas Ovalle (demandados), lo que lleva a deducir que si bien pudieren haber similitudes en los hechos en que se fundan ambas causas, ello no es suficiente para acoger la excepción de cosa juzgada opuesta por los demandados, dado que esos hechos pueden no ser constitutivos del delito de calumnia, pero no es incompatible que los mismos hechos, como en este caso, puedan constituir un delito civil que habilite para reclamar los



correspondientes daños, lo que permite entender que la causa de pedir es diversa, lo que conlleva que no se configure la tripe identidad exigida por la excepción opuesta.

SEXTO: Que por lo anterior, se rechaza la excepción de cosa juzgada que opusieron los demandados, de conformidad con el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil.

SÉPTIMO: Que como consecuencia del rechazo de la antes referida excepción, cabe pronunciarse respecto de la demanda por indemnización de perjuicios presentada por la parte demandante, respecto de la cual no hubo pronunciamiento formal en la sentencia recurrida, por haber acogido esa excepción de cosa juzgada.

OCTAVO: Que la demanda por indemnización de perjuicios presentada por la parte demandante, se sustenta en la interposición de tres acciones criminales que se presentaron por los demandados en su contra durante el año 2006, respecto de las cuales se señala por el actor que se daría una situación de abuso de derechos subjetivos, con ánimo doloso, por lo cual se le tienen que resarcir los perjuicios que de ello se han derivado para su parte.

NOVENO: Que la situación en que el demandante apoya su demanda por indemnización de perjuicios, aparece analizada en cuanto a los hechos y al derecho en la sentencia recurrida, en los considerandos 53º (cuya redacción se reemplaza en esta sentencia) al 65º, ambos inclusive, lo que se dan por reproducidos.

DÉCIMO: Que además de lo razonado por la juez a quo, no debe olvidarse que la demanda principal se apoya en que los demandados con el fin de entorpecer el ejercicio profesional del demandante y a título de venganza personal -por no soportar que se desempeñara en el ámbito de la salud-, interpusieron una querella por delitos inexistentes, haciendo



uso malicioso y abusando del derecho que les confiere la ley para accionar por delitos reales.

En esta materia, la doctrina mayoritaria en nuestro país, que cuenta entre sus autores a los profesores Arturo Alessandri Rodríguez, Fernando Fueyo Laneri y Enrique Barros Bourie, aceptan el abuso de derecho como fuente de responsabilidad extracontractual, el primero, al entender que se genera cuando su titular lo ejerce dolosa o culpablemente, con la intención de dañar o sin la diligencia o cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus actos o negocios propios (“De la responsabilidad civil extracontractual, Ed. Jurídica.”); el segundo, en su proposición de tratar la materia en la Parte General o Título Preliminar del Código Civil, sosteniendo que “Los derechos subjetivos, públicos y privados, no podrán ejercitarse abusivamente, sino conforme a las exigencias de la buena fe, el orden público y las buenas costumbres imperantes...” (“Instituciones de Derecho Civil Moderno”). Y por último, el profesor Enrique Barros nos señala que “El ejercicio de un derecho, si de él deriva daño mediante dolo o culpa, se transforma en la comisión de un delito o cuasidelito civil que, como fuente de obligaciones se rige por los preceptos del Título XXXV del Libro IV del Código Civil; también se ha entendido que la teoría de abuso del derecho se funda en el “ejercicio doloso o culposo de un derecho” y “constituye un ilícito especial del que nuestra legislación positiva nos otorga varios ejemplos”. Lo característico del abuso del derecho es que la conducta o acción de la cual deriva la responsabilidad consiste precisamente en el ejercicio antijurídico. La conducta, al igual que cualquier otra, resulta ser dolosa o culposa de acuerdo al régimen general de responsabilidad. En este sentido, para atribuir responsabilidad, es posible distinguir dos tipos de abuso del derecho: el ejercicio doloso y el ejercicio



culpable de un derecho.” (Barros, Enrique. *“Tratado de Responsabilidad Extracontractual”*. Editorial Jurídica de Chile. Página 648).

A su vez, el profesor Pablo Rodríguez Grez, con motivo de lo mismo, señala “El abuso del derecho consiste, entonces, en exceder el interés jurídicamente protegido por el derecho positivo al instituirse la norma que lo consagra. Este es el único límite jurídico en su ejercicio. Más allá del interés o fuera del interés que se permite realizar, se actúa al margen del derecho, de hecho, infringiendo el ordenamiento positivo. Por consiguiente, no se abusa del derecho, sino de una apariencia, de un espejismo, de una sombra que no corresponde a una realidad concreta”. (Rodríguez Grez, Pablo. *“El Abuso del Derecho y El Abuso Circunstancial”*. Editorial Jurídica de Chile, pág. 138).

UNDÉCIMO: Que, conforme a lo expuesto, para que se dé una situación de abuso de un derecho con motivo del ejercicio de acciones judiciales, es menester que concurren los elementos propios de la responsabilidad civil extracontractual, cuales son: “Al hecho voluntario antijurídico debe añadirse el que haya efectivamente causado daño (nocividad), requisito que se desdobra en dos: el daño propiamente tal y el vínculo causal entre el hecho ilícito y el perjuicio (causalidad). Pero esto no basta, es necesario que el hecho sea subjetivamente antijurídico, es decir, que sea reprochable o imputable a una persona. Las formas de imputación ordinaria son el dolo y la culpa. Formas de imputación extraordinarias configuran los supuestos de la llamada responsabilidad objetiva (riesgo creado, riesgo-provecho). La responsabilidad civil surge cuando puede verificarse un hecho voluntario, ilícito, imputable que ha sido la causa de un daño a las personas (Corral Talciani, Hernán. *“Lecciones de Responsabilidad Civil*



Extracontractual”. Editorial Legalpublishing. 2a edición actualizada. 2013. Pág. 119).

DUODÉCIMO: Que en este caso y tal como lo sostiene la sentencia apelada, no existen antecedentes para llegar a la conclusión de que los demandados habrían usado indebidamente el sistema judicial, apartándose de los fines propios del derecho a la acción que toda persona tiene reconocido en la Constitución Política de la República y en este sentido, no puede olvidarse que el uso excesivo de aparato jurisdiccional –lo que incluso no se probó en este caso- no es en sí ilícito, sino acaso injustificado, lo que se encuentra sancionado expresamente por el legislador al contemplar la condena en costas. Luego, para que dicho ejercicio se transforme en un abuso, se requiere la prueba de un dolo especialísimo, que como se ve, en autos no se demostró, en tanto no existen antecedentes que permitan sostener una conducta dolosa o culposa de los demandados, con el objetivo específico de causar daño al demandante, lo que permite advertir la inconcurrencia de uno de los presupuestos de la acción que se dedujo.

DÉCIMO TERCERO: Que, por otro lado, los restantes argumentos del demandante y los entregados por el demandado en su integridad, en sus escritos de apelación respectivos, no logran modificar lo que viene resuelto.

Por estas consideraciones y teniendo en consideración lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se declara que:**

I.- Se revoca la sentencia dictada por el 30° Juzgado Civil de Santiago, de fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, en aquella parte que acogió la excepción de cosa juzgada y en cambio se decide que esta queda desestimada;

II.- Se rechaza íntegramente la demanda principal;



III.- **Se confirma**, en lo demás apelado, el referido fallo.

Redacción del abogado integrante señor F. Ovalle.

Regístrese y devuélvase.

Nº Civil- 14.692-2018.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministra (S) señora Blanca Rojas Arancibia y por el Abogado Integrante señor Francisco Javier Ovalle Aldunate. No firman la Ministra (S) señora Rojas por haber terminado su suplencia ni el Abogado Integrante señor Ovalle por encontrarse ausente.



Proveído por la Presidenta de la Séptima Sala de la C.A. de Santiago.

En Santiago, a ocho de marzo de dos mil veintidós, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

